



Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Junta Consultiva
de Contractació Administrativa

Exp. Junta Consultiva: RES 8/2015

Resolución de la solicitud de suspensión

Exp. de origen: contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para el suministro del equipamiento de monitorización para el nuevo Hospital Universitario Son Espases

SSCC DC 127/09

Servicio de Salud de las Illes Balears

Recurrente: General Electric Healthcare España, SAU

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 31 de marzo de 2015 por el que se deniega la suspensión de la ejecución de la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2014, del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para el suministro del equipamiento de monitorización para el nuevo Hospital Universitario Son Espases

Hechos

1. El 29 de octubre de 2010 el director general del Servicio de Salud de las Illes Balears y la representante de GE Healthcare Clinical Systems, SL (hoy, General Electric Healthcare España, SAU) firmaron el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para el suministro del equipamiento de monitorización para el nuevo Hospital Universitario Son Espases.
2. El 24 de febrero de 2015 el director general del Servicio de Salud de las Illes Balears dictó la Resolución por la que se establece una deducción correspondiente al cuarto trimestre de 2014 por un total de 5.351,49 euros, de acuerdo con el apartado 20 (por error en la Resolución se menciona el apartado 17) del Documento de determinación y definición de los medios que reguló la licitación y el informe de factura emitido por el sistema Óptima. Esta Resolución se notificó al contratista el 27 de febrero de 2015, según manifiesta el mismo contratista en el escrito de recurso.



3. El 24 de marzo de 2015 el representante de General Electric Healthcare España, SAU interpuso ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa un recurso especial en materia de contratación contra la Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes Balears de 24 de febrero de 2015 sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2014 de este contrato.

El recurrente solicita que se anule la Resolución que se impugna y que se suspenda su ejecución, dado que podría suponerle un perjuicio difícil o imposible de reparar.

Fundamentos de derecho

1. El apartado 1 del artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, dispone que:

La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

De acuerdo con la regla general que establece este artículo, la Resolución objeto de impugnación es un acto administrativo inmediatamente ejecutivo.

El apartado 2 de este mismo artículo dispone que:

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurren alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de esta Ley.

2. El recurrente manifiesta que la ejecución de la Resolución impugnada podría suponerle un perjuicio difícil o imposible de reparar, pero no argumenta ni acredita cuál es este posible perjuicio.



Hay que señalar que la Resolución objeto del recurso, cuya suspensión solicita el recurrente, es un acto de contenido meramente económico, y estos actos no causan perjuicios que sean difíciles o imposibles de reparar. Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de 16 de mayo de 2000, en la que manifiesta que:

como ya tiene reiterado esta Sala, el contenido económico del acto administrativo, cuando éste no ostenta un carácter desorbitado, no puede reputarse perjuicio de difícil o imposible reparación, base necesaria e imprescindible para acordar la suspensión, porque la Administración es por su propia naturaleza y normal funcionamiento una entidad responsable y solvente en grado máximo, y por tanto, ante la posible existencia de perjuicios derivados de la ejecución inmediata del acto administrativo que posteriormente fuere anulado en vía jurisdiccional, no puede ofrecer ni ofrece dificultades la adecuada y fácil reparación de los mismos.

El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears se ha manifestado en el mismo sentido en las sentencias de 10 de enero y de 5 de junio de 2012, entre otras.

Por tanto, dado el importe de la deducción, que en ningún caso podría considerarse desorbitado, y en atención al interés público, no existe causa alguna que fundamente la suspensión de la Resolución sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2014, del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para el suministro del equipamiento de monitorización para el nuevo Hospital Universitario Son Espases.

Por todo ello, dicto el siguiente

Acuerdo

1. Denegar la suspensión de la ejecución de la Resolución sobre la revisión de las deducciones aplicables al pago por disponibilidad correspondiente al cuarto trimestre de 2014, del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para el suministro del equipamiento de monitorización para el nuevo Hospital Universitario Son Espases, dado que no se acredita que de él se derive perjuicio alguno para el recurrente.
2. Notificar este Acuerdo a General Electric Healthcare España, SAU y al Servicio de Salud de las Illes Balears.



Interposición de recursos

Contra este Acuerdo —que agota la vía administrativa— puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se recibió la notificación, de acuerdo con los artículos 10.1 *a* y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La secretaria de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa

Flor Espinar Maat